Cultura
y diversidad:
30 años
de bienes
culturales

El Patrimonio tiene demasiado que ver, aunque ya no sólo, con el pasado. Realizar un Congreso que se ocupe de revisar el estado de las cuestiones que afectan al Patrimonio español, en Córdoba, puede parecer una tautología. ¿Pero en qué ciudad española no sucedería lo mismo? Historia, legislación, técnicas, y nuevos conceptos de Patrimonio, fueron las líneas fundamentales del encuentro. Los ponentes, todos autoridades en distintos ángulos de la cuestión, dictaron verdaderas lecciones magistrales. El periodista, que tenía que atender a dos sedes simultáneas, procura transmitir lo más interesante y lo más polémico. Cuando el discurso pretendió ilustrar el período que abarca la democracia, realizar una crónica, lo respeta tal cual. Los errores de transcripción son, en todo caso, suyos.

Cultura y diversidad: 30 años de bienes culturales

España, según los expertos, posee el segundo Patrimonio Histórico de Occidente, quizás el primero si se atiende a la diversidad de culturas que han dejado memoria de sí en su territorio. La protección de este valor desde el punto de vista legal, técnico y artístico, así como el acceso, conocimiento y disfrute del mismo por los ciudadanos constituye una labor constante que involucra a diferentes disciplinas y sectores de la Administración. Arquitectura, urbanismo, derecho, arqueología, un número cada vez mayor y más sofisticado de técnicas auxiliares constituyen el mundo teórico del Patrimonio; la gestión y las decisiones políticas y administrativas, el marco diario en el que ha de desenvolverse la práctica de los expertos.

La democracia y la instauración del Estado de las Autonomías significaron un cambio radical en todos los aspectos; innegables avances y también nuevos problemas. El análisis de estos cambios, de la situación actual de la protección jurídica de los bienes culturales, del papel de los poderes públicos junto al balance que puede hacerse transcurridos veinte años desde la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico fue el programa del simposio que reunió en Córdoba, convocados por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura a expertos, gestores y teóricos junto a responsables de diversas Comunidades Autónomas. Pasado, Presente y Futuro de los Bienes Culturales, Patrimonio y Ciencia, Patrimonio y Sociedad, fueron los tres apartados que bajo la forma de talleres se desarrollaron

en tres apretadas jornadas en la sede de la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba.

El entramado jurídico

Introducción de Javier García Fernández, Secretario General Técnico del Ministerio de la Vivienda

Aunque la UNESCO aprobó en 2003 la Convención sobre Bienes Culturales Inmateriales, el 95% de los Bienes Culturales son materiales, por lo que la primera respuesta para su protección ha de ser de carácter técnico. Sin embargo, «tiene que haber una respuesta jurídica que oriente en una determinada dirección las actuaciones... La restauración en la actualidad se realiza con determinadas normas, criterios, que tienen un marco jurídico». Javier García Fernández, Secretario General Técnico del Ministerio de la Vivienda, es el encargado de introducir en el Simposio la discusión legislativa, y lo hace con un marcado tono historicista. Así, nos hace saber que la primera Constitución que se ocupa de los Bienes Culturales es la mexicana de 1917 que, como Constitución de un Estado Federal, se ocupa de los Bienes Culturales desde «la perspectiva de la distribución territorial del poder». La que siguen la constitución de la República de Weimar (1919) y la austriaca de 1920.

La Constitución Española de 1978 trata de los Bienes Culturales en los artículos 46 y 148 que regulan el acceso a los mismos y en los que se prevé que, según los diferentes estatutos, serán competencia de los Comunidades Autónomas. En el artículo 149.1.28.^a se establece como competencia exclusiva del Estado la lucha contra la expoliación. La reciente solicitud de un informe al Consejo de Estado por parte del Consejo de Ministros sobre la posible reforma de cuatro materias en la Constitución, no incluía nada sobre Bienes Culturales, «por lo que no son de prever cambios en esta materia».

Bajando un peldaño en el rango legal encontramos «la Ley de Patrimonio Histórico del año 85»; pero a su nivel existen otras leyes estatales que «de una forma u otra también influyen sobre la gestión del Patrimonio: la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 y la Ley del Suelo. Esta última produce, «a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997», una situación jurídica difícil «pues el Estado tiene muy poca competencia para regular el régimen del suelo».

Por otra parte, multitud de leyes de diverso nivel pueden influir sobre el Patrimonio, desde el Código Penal, la legislación sobre contra-

bando, la ley de Tributos, de expropiación, etcétera. Si desde las leyes descendemos a los reglamentos, la cosa se complica notablemente. No sólo existe el reglamento de la propia ley del Patrimonio desarrollado por un decreto del año 1987, sino que las diversas instituciones tienen su reglamento: museos estatales, bibliotecas públicas, etcétera. Quince Comunidades Autónomas, de las diecisiete, han desarrollado su Ley de Patrimonio y sus correspondientes reglamentos. También leyes de archivos, museos y bibliotecas. Esto hace que el ordenamiento jurídico español sobre Bienes Culturales sea «notablemente complejo y toda su complejidad ha de tenerse en cuenta a la hora de la reforma de la Ley estatal»

Razones para reformar la Ley de 1985

En opinión de Javier García Fernández, la reforma de la Ley del Patrimonio Histórico «tiene sentido por las razones que se derivan de lo expuesto hasta ahora y además porque “en 1985 no era previsible el desarrollo de las leyes autonómicas; lo que plantea en la actualidad una necesidad de armonización”. Y preguntas de difícil respuesta. Entre ellas: «¿Cuál es la función de una ley estatal?».

Si las relaciones entre el Patrimonio y la legislación urbanística siempre han sido complicadas, «¿cómo será posible conectar los diecisiete ordenamientos ahora existentes y hacerlos compatibles, a su vez, con quince leyes autonómicas que regulan el régimen de los bienes inmuebles? Es necesaria una solución urgente porque «muy pronto el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones».

Los municipios son entidades con un «fuerte desarrollo de sus competencias», que en ocasiones van «más allá de la legislación». Por tanto se hace necesario saber cuál será «la posición de las entidades locales a la hora de proteger los Bienes Culturales». Cómo afectará, en este sentido, la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local.

Obligaciones jurídicas internacionales y la aparición de nuevos conceptos de Patrimonio hasta ahora no tenidos en cuenta, como las Convenciones de la UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial o Patrimonio Subacuático o el Patrimonio Industrial (asunto este último, sobre el que Asturias, por ejemplo, ya tiene legislación); «hacen aconsejable acometer la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985».

Reparto competencial entre las Comunidades Autónomas y el Estado

Luis Lafuente Batanero, Subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.

El artículo 46 de la Constitución es estimado como la base de todo el esquema jurídico de protección del Patrimonio. Según el subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, Luis Lafuente Batanero, sin la existencia del artículo 46 «no llegaríamos a nada». Aun así, se recuerda que el artículo 44 establece el derecho de acceso a la cultura y que, naturalmente, «en el concepto de cultura entra el Patrimonio».

Del artículo 46 se ensalza su cualidad de amparo, y la formula imperativa de su redacción («garantizarán, promoverán») que va «dirigida a todos»: a las administraciones locales, territoriales y autonómicas. Su gran merito reside en que garantiza la conservación de los bienes, «con independencia del régimen jurídico y del titular de la propiedad». La Constitución protege incluso los bienes no catalogados (los yacimientos); si existe una «presunción de riqueza ya está protegido». Este carácter imperativo garantiza la preponderancia de la Constitución, por tanto del Estado, sobre otros órdenes legislativos. Por ejemplo, sobre el Derecho Canónico, que se aplica a los bienes de la Iglesia católica.

El articulado de la Constitución sobre Patrimonio, sin embargo, resulta de escasa utilidad a la hora del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El punto 28.1 del artículo 149 establece que el Estado tiene competencia en materia de exportación de Bienes Culturales y en la lucha contra la expoliación. Por otra parte el Estado conserva la titularidad de ciertos museos, archivos y bibliotecas, aunque puede traspasar su gestión a las Comunidades Autónomas y, de hecho, así sucede en la mayoría de los casos. Esta situación un tanto esquizofrénica se complica aún más cuando en determinados museos las incorporaciones de los últimos años a las colecciones ya son de titularidad autonómica.

Que en el artículo 149.2 de la Constitución se diga que: «sin perjuicio de las competencias que asuman las Comunidades Autónomas el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial», viene a «complicar» la situación competencial: «el Estado no puede deshacerse de la cultura. Y por tanto, no puede deshacerse del Patrimonio».

Las competencias del Estado quedan reducidas, además de a las instituciones citadas anteriormente, a aquellas otras adscritas al Patrimonio Nacional, a los servicios públicos y a las reales academias. Por tanto, la lucha contra el expolio y la organización del comercio que

se genera con la exportación de Bienes Culturales siguen apareciendo como una de sus más importantes atribuciones.

La organización administrativa

Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén.

Buscar la dimensión participativa

La protección del Patrimonio Histórico se ha convertido en un principio rector internacional. Desde 1917 en México, hasta las más recientes constituciones europeas y latinoamericanas se ocupan del Patrimonio como una de las obligaciones centrales del Estado. Este hecho, que en España es de primera importancia puesto que trasciende los poderes públicos, se ve refrenado en su eficacia al quedar su cumplimiento a la discrecionalidad del legislador y no existir un mecanismo de tutela ciudadana sobre su cumplimiento. Aún así, su mera existencia genera expectativas políticas, se constituye en elemento de presión sobre los poderes públicos y otorga legitimidad en caso de conflicto jurídico con otros derechos (comercio, propiedad, etcétera).

La dimensión participativa que tienen el Estado del Bienestar y el Estado Social aún está inédita en cuanto a las cuestiones de Patrimonio. El artículo 128 de la Constitución establece una vía de colaboración ciudadana, que aún no hemos tenido en cuenta. Sería importante que como ya sucede con algunas cuestiones relativas al medio ambiente se respetara el derecho ciudadano a participar en las decisiones. «Como diría Giannini, los Bienes Culturales tienen sentido si son accesibles al ciudadano».

José Luis Álvarez, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Un padre de la Ley

José Luis Álvarez, considerado por muchos de los asistentes como «el padre del derecho sobre Bienes Culturales en España», tuvo una breve participación en la que se limitó a manifestar que «la ley del Patrimonio Histórico de 1985 es, en conjunto, una buena ley» y que debe ponerse «el máximo cuidado al tocarla». Las leyes autonómicas

«por el atractivo del poder» olvidan la existencia de la ley general. La existencia de más de cien normas de las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio, «que vulneran la ley estatal», perjudican, en su opinión, los derechos más generales.

Alfredo Pérez de Armiñán, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Las leyes autonómicas vulneran, en mayor o menor medida, la Constitución

Alfredo Pérez de Armiñán, letrado del Congreso cuando se tramitó la Ley de 1985, piensa que si ésta fuera reformada habría de serlo con un amplio consenso entre las distintas administraciones y también entre la comunidad cultural. Consenso de la comunidad cultural que limara las graves discrepancias que hoy se producen entre arquitectos, historiadores y arqueólogos. Discrepancias que ponen en cuestión, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley, desde la sentencia sobre el teatro romano de Sagunto. Independientemente de que «yo crea que el artículo 39 es un compendio de tradición técnica, histórica y jurídica, que conserva su valor en lo sustancial».

Como último director de Bellas Artes en la etapa del gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático), participó en las primeras transferencias a las Comunidades Autónomas y redactó el Decreto de Transferencias a la Xunta de Galicia. Decreto que después serviría de patrón al resto. Previamente se habían realizado las transferencias a Cataluña (1980) y al País Vasco (1981), pero en su opinión estos decretos «estaban planteados desde una perspectiva de elusión de los problemas».

Entre 1985 y 1990 el Ministerio de Cultura «quiere, desea y se propone» ejercer una competencia sobre Patrimonio Histórico de acuerdo con la Ley del 85, de carácter subsidiario en cuanto a la tutela pero preferente en lo que respecta a la defensa del conjunto, es decir: registro, catálogo, etc. Una atribución que le confería el artículo 4.º de la Ley (sobre defensa en problemas jurídicos) se utilizó para la declaración del Mercado del Este (Santander) como bien patrimonial.

La opinión de Pérez Armiñán sobre el recorrido posterior a 1990 de la aplicación de la Ley es francamente negativo: «Lo que quedará del Estado Autonómico está por ver, y el Patrimonio Histórico depende de esto». Esta afirmación, un tanto apocalíptica, se formulaba en pleno debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, a buen seguro, influida por los peores augurios.

Las quince leyes autonómicas existentes «vulneran en mayor o menor medida lo dicho por la Constitución», pero el Ministerio de Cultura desde 1990 «se ha abstenido de llevarlas al Tribunal Constitucional para depurarlas». Para Pérez Armiñán, la «huida de la tutela de la Administración Estatal» es un grave problema a resolver, entre otras cosas, «para conocer los límites del núcleo reservado al Estado».

La relación entre Patrimonio Histórico y urbanismo merecería «ella sola un foro». Pérez de Armiñán advierte que «la pulverización de la regulación normativa de la protección de los conjuntos históricos, de las zonas arqueológicas, de los entornos de los conjuntos y zonas, es absoluta». Fija como origen de la debacle la sentencia de 1997 sobre la Ley del Suelo, «que hace que se olvide la Ley de Patrimonio». Y lo que es peor: «en caso de contradicción se suele aplicar la Ley del Suelo».

La anunciada reforma de la Ley de Régimen Local y, con ella, el previsible aumento de las competencias de los Ayuntamientos le hacen prever la existencia de «varios miles de planes urbanísticos sobre conjuntos históricos». El «retroceso» en la protección del Patrimonio se produce en paralelo a la aparición del segundo «gran *boom* de la construcción en España».

Rosario Alonso Ibáñez, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo

Conexiones entre el Derecho del Patrimonio Histórico y el Derecho urbanístico

La profesora Rosario Alonso Ibáñez se muestra convencida de que, una vez formulada la Ley del Patrimonio Histórico de 1985, «el Estado abandonó el liderazgo». Algo que debería recuperar con urgencia. Algo que podría hacer acometiendo la reforma de la Ley, aunque «manteniendo sus principios y su esqueleto».

La razones para la reforma no residen sólo en lo legislado con posterioridad por las Autonomías («verdaderos códigos de protección del Patrimonio»), sino de la «consideración que se tiene sobre el funcionamiento del Estado de las Autonomías que hoy es muy distinta a la de 1980 ó 1985».

En su opinión la Ley de 1985 conecta perfectamente con lo que la Constitución define como Patrimonio Histórico, «sobre todo en la consideración del Patrimonio como un instrumento de acceso a la cultura». Lo que viene a configurarlo como una nueva categoría de bien (o bienes) públicos. Por otra parte, aportó «consideraciones estables de las que habría que partir: aquellas que tienen que ver con los títulos que otorgan competencias al Estado». Y que, en su opinión, la redacción po-

dría ser mejorada, por ejemplo, «en aquellos artículos en los que trata de la expoliación (y lo hace en términos amplios), pero no recoge el concepto constitucional de competencia exclusiva del Estado.

Entre los fallos de la Ley del 85, señaló como importantes la ausencia referencia a cuáles de entre sus títulos son ejercicio del título competencial 149.1.28.^a o del 149.2. Esta falta de adjudicación facilitó, en su opinión, que las Comunidades Autónomas «hayan llegado hasta donde han llegado». Una posible reforma de la Ley habría de dar solución a este conflicto definiendo «qué es lo que queremos, desde la legislación estatal, considerar que es imprescindible para defender el Patrimonio Histórico frente a la expoliación».

Hemos llegado a un punto en el que el título competencial del Estado [149.1.28.^a] se ha reducido a la mínima expresión la que se refleja ahora en el artículo 57 bis del Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Patrimonio Histórico. O lo que es lo mismo: «han quedado reducidas a la mínima expresión las competencias de gestión del Estado en defensa de la expoliación, su título competencial en exclusiva».

Delfín Rodríguez, Historiador. Universidad Complutense de Madrid

La sociedad de la Historia

La observación primera del historiador Delfín Rodríguez fue reconocer la complejidad y variedad de los colectivos afectados en mayor o menor medida por la conservación y la gestión del Patrimonio Histórico.

Historiadores, políticos, turistas, emprendedores de negocios hosteleros, químicos, juristas fueron, a vuela pluma, los citados. La cantidad y variedad le llevan a diagnosticar para el sector «una crisis de crecimiento», impulsada por el optimismo de todos respecto «a lo implacablemente magnífico que es atender estos territorios, por el hecho mismo de que la actividad genera riqueza...»

Las actuaciones de los últimos treinta o cuarenta años le sugieren una gran «hiperactividad», no cree que en todos los casos obedezcan a criterios razonables, pues para él la Historia es un proceso de mezcla, híbrido y sucio que es imposible contar de una manera limpia y «optimista». La anterior reflexión de Felipe Criado sobre la conveniencia de que los estudiosos implicados en restauración se orientaran hacia campos «más prácticos como el económico, el técnico, la organización social o la difusión de la cultura» le inquieta, pues existe el riesgo de que las restauraciones obedezcan «a necesidades de gestión, de organización, de producción y de beneficio». Actitud que explicaría, a su

modo de ver, «la actividad incesante». Y a la que califica como algo ajeno a la Historia o, lo que es peor, como «un secuestro de la Historia, alejándola del tiempo y del peso del tiempo, pues para que sea negocio es necesario mantenerla impoluta, embalsamada y paralizada».

En este punto llamó en su auxilio a don Miguel de Unamuno, quien en 1924 afirmaba: «qué falta nos está haciendo una catástrofe intelectual, acompañada de una catástrofe del lenguaje y otra estética, que se trague en el caos toda esta escombrera de lugares comunes, todo este escurial de frívolas patochadas». Frivolidad que Delfín Rodríguez equipara a la gestión instrumental, política, de la cultura, del arte y de la historia, de los últimos veinte o veinticinco años. Para él, la lógica de la cultura y de la historia son contrarias a la lógica de la economía y del beneficio, hasta el extremo de que «es un destino fatal que acaben confrontándose».

A vueltas con la Historia y la conservación del Patrimonio, Rodríguez puso como ejemplo la intervención de Grassi en el teatro romano de Sagunto: «El Tribunal Supremo ordenó derribar la intervención por no atenerse a la Ley». Lo que viene a demostrar el desinterés de los políticos por la Historia y el valor subsidiario que le otorgan los arquitectos. El predominio de la lógica del beneficio podría conducir a sandeces como «reconstruir la mezquita de Córdoba, trasladar la catedral al otro lado del río, quitar el giraldillo auténtico de la Giralda y sustituirlo por uno de poliéster, o limpiar San Juan de Letrán de los aderezos espurios y estúpidos de Francesco Borromini». La misma lógica, hace observar, «que permitió eliminar Sagunto».

La *suciedad* de la Historia, los conflictos y heridas que genera el paso del tiempo se contraponen de tal manera al concepto de Patrimonio Histórico «como negocio» que, para los especialistas en su gestión, «la Historia es perfectamente prescindible, absolutamente inútil». Para ejemplificar esto Delfín Rodríguez expuso el caso del Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro: «Un libro de Brown y Elliot convence a los políticos de reconstruir el Salón de Reinos en el Museo del Ejército. Por lo tanto, un libro de historia tiene consecuencias directas sobre intervención y conservación del Patrimonio». Ocurre que la reconstrucción del Salón de Reinos implica el traslado del Museo del Ejército a Toledo y que el orden de las colecciones del Museo del Prado (por escuelas o maestros) cambie de pronto de sentido para convertirse en un intento de reconstrucción historicista de un lugar que se puede reconstruir. «Con la misma lógica podríamos devolver los cuadros a los antiguos palacios, conventos o colecciones privadas». Conclusiones: «Un magnífico libro de Historia no proporciona criterios ni para intervenir ni para restaurar». Finalmente es un libro ajeno al proyecto.

La intervención de Rodríguez se prolongó sobre la idea de la subsidiariedad de la investigación histórica: «creo que la profesión del futuro

va a ser restaurar lo restaurado, rehacer lo rehecho, reconstruir lo reconstruido». Ante este futuro posible caben, en su opinión, dos actitudes, «alegrarnos por las grietas, mimarlas», o «intervenir haciendo crecer los edificios perdiendo el terror a la mezcla». Sobre este último punto puso como ejemplo intervenciones habidas en La Granja.

Concluyó mostrando su perplejidad ante su propia visión del futuro: «no soy optimista, creo que vamos a morir de éxito en estos temas de la conservación del Patrimonio. Pues el beneficio es mucho, y eso es bueno para todos, para las ciudades, para las instituciones, los gobiernos. No sé si tanto para la cultura ni para la propia Historia, que es, como he tratado de demostrar aquí, absolutamente innecesaria para estos temas».

Felipe Criado, Antropólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La huella de la memoria y el olvido

La intervención de Felipe Criado fue, en toda regla, un manifiesto en pro de la redefinición de los criterios que en la actualidad informan la práctica de las ciencias que intervienen en el Patrimonio y, muy especialmente de su especialidad, la arqueología. Sus facetas de arqueólogo y de investigador en el área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC se unieron en su exposición. Su punto de partida fue la diferencia que marca en el presente la sustitución del concepto de Patrimonio Histórico por el de Patrimonio Cultural, lo que implica un «desplazamiento de las metodologías y de las teorías con las que se valora el objeto de estudio». Este cambio de un concepto historicista a otro más antropológico y cultural que implica, en su opinión, «una concepción menos occidental pues está menos marcada por el concepto moderno del tiempo que el discurso historicista hasta ahora entronizado como elemento clave del saber occidental». Estos cambios hacen necesaria una nueva definición del Patrimonio Cultural, bien en el marco de la Ley o previamente por los especialistas.

Criado avanzó una definición: el Patrimonio cultural sería: «la huella de la memoria y del olvido. Huella porque lo constituyen restos (materiales e inmateriales) que apelan a los recuerdos del pasado. Olvido porque la mayor parte de las cosas que ocurrieron han sido olvidadas, aunque quede una huella. «Esta definición evita el imperialismo del presente, sobre todo de los discursos victoriosos en la Historia que son los que condenan al olvido al resto de las cosas».

La investigación, al ser la forma y el medio de significar el Patrimonio, de recuperar el valor original de aquellos elementos que llama-

mos Patrimonio, tiene una función muy clara. Pero esa función ya no es suficiente. Antes de avanzar conclusiones Criado realizó la crítica de las Humanidades y de las disciplinas ligadas al Patrimonio como meras reproductoras del sistema académico universitario: productoras de conocimiento académico. Para él las ciencias del Patrimonio afrontan «la necesidad imperiosa de transformarse en tecnologías». O más exactamente en tecnociencias. En concreto, la Arqueología «tiene que afrontar una segunda transformación para convertirse en una tecnología para la gestión integral del Patrimonio Cultural, entendiendo por gestión su protección, estudio, recuperación y revalorización. No estoy diciendo que sea la única tecnología del Patrimonio Cultural, sino que transformada en tecnología colabore con otras disciplinas de Humanidades que también habrían de sufrir su transformación tecnológica».

Aclaró con rapidez que su concepción de la tecnología no tiene nada que ver con la dominante: «Lo que hago es volver al concepto original de tecnología, que, como descubrió Heidegger, es una tecnología para la producción. El saber que hace aparecer cosas que antes no existían. Que nuestra sociedad *high tech* equipare tecnología con una suerte de fantasía maquinista, es otra cosa». El concepto de tecnociencia (un conocimiento que construye y transforma la realidad mediante su inserción en el proceso productivo) se ajusta mejor a su idea de transformación de las disciplinas que intervienen en la gestión del Patrimonio Cultural. Aplicándolo la «arqueología tecnocientífica sería aquella que no se conforma con generar conocimiento sobre los procesos de producción sociocultural, sino que juega un papel en la dinámica de construcción y transformación de la realidad en el presente a través de su plena inserción en las políticas de gestión del Patrimonio Cultural y de otros conceptos ligados a él, como medio ambiente, ordenación del territorio y del suelo, planeamiento urbano e, incluso, la sostenibilidad».

Como tareas inmediatas que propicien los cambios apuntados en su intervención Criado propuso como urgentes la normalización de las Humanidades dentro del campo de la ciencia y de la investigación científica, lo que supondría orientarse hacia un ideal de utilidad y un ideal científico. Es decir, hacia la generación de un conocimiento que si no directamente aplicable, sea útil, objetivable y discutible. Un conocimiento que habrá surgido mediante la aplicación de «protocolos constantes y consensuados». Un conocimiento que propiciará la creación de bases de datos «abiertas y estables» algo muy difícil mientras no existan estándares de registros, un problema capital para la investigación.

Desde estas reformas y de la consideración de la investigación como «un servicio público», podrían hacerse realidad otros *sueños* de Felipe Criado. La existencia de Laboratorios de Ciencias del Patrimonio o la creación de un Centro de Ciencias de la Conservación del

Patrimonio, desde el que se regule el ciclo completo de actuaciones: desde la investigación a la intervención. «Si es cierto que tenemos el segundo Patrimonio del mundo, no podemos seguir así».

La baza de la comunicación por un Consejo Superior De Cultura

Jesús Prieto de Pedro, Universidad Nacional de Educación a Distancia

El profesor Prieto prometió finalizar su exposición con una propuesta. Antes realizó una serie de consideraciones sobre el «estado actual del conjunto normativo que encauza las cuestiones del Patrimonio». En primer lugar señaló su «singularidad» desde la propia Constitución, pues utiliza, junto a las técnicas de la exclusividad y la concurrencia competenciales, las competencias compartidas en los servicios del Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas. En su opinión, el principio lógico, *inclusus unus exclusius alterius* (lo que se da a uno ya no lo puede tener otro), deja de cumplirse. De manera más clara aún si pensamos en el precepto imperativo de «fomento de la cultura».

Sobre la Ley de Patrimonio de 1985, Prieto piensa que amplía el ámbito de regulación (sus competencias) «más allá de lo que debía», lo que, a su vez, «ha propiciado que las Comunidades Autónomas la imiten». Esto produce dos ordenamientos superpuestos que es necesario «reconducir». Y esa reconducción «pasaría por fijar bien cuáles son los títulos básicos del Estado»

Reconoce como principales los que hacen alusión a la expoliación y al fomento de la cultura; pero existen otros «muy específicos», relacionados con el Estatuto de la Propiedad Cultural, «que hasta el momento no se han explotado». La propiedad cultural necesita, en su opinión, una «regulación que garantice unas condiciones básicas para todos los ciudadanos [Art. 149.1.1.^a] y eso no está en estos momentos garantizado».

Habría otros títulos competenciales a *resucitar*, pero el profesor Prieto regresa a la Constitución (Art. 149.2) para fijarse, además de en el concepto de «servicio a la cultura como deber y atribución esencial del Estado», en su conclusión cuando afirma, «además facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas». De la primera parte, de su contundencia, extrae varias conclusiones. La primera de ellas es que no se cumple, puesto que aparte de ese manda-

to constitucional el Estado, no tiene competencias salvo para declarar importantes aquellos bienes públicos que pertenezcan a algún servicio público de su titularidad. Sería bueno que recuperara esta capacidad «puesto que en la Constitución, el Patrimonio está concebido en términos de identidad y de identidades complejas. Y ya las identidades no son excluyentes, no son exclusivas».

El cambio revolucionario que supone el hecho de que, en el presente, una persona tenga la oportunidad «de pertenecer a múltiples realidades culturales y a múltiples identidades» debería tener un reflejo legislativo. Prieto propone «repensar la situación» y abrir la perspectiva intraestatal sobre Patrimonio a otras de nivel europeo e incluso mundial. Como ejemplo pone el reciente proyecto de Carta Cultural Iberoamericana [cumbre Iberoamericana de Salamanca] que acoge la existencia de bienes de interés cultural iberoamericano. Esa perspectiva añadida permitiría definir hacia abajo los bienes culturales estatales, autonómicos e incluso municipales.

El paisaje que dibuja el profesor Prieto es el de la diversidad cultural. Una diversidad para «disfrutarla, para beneficiarse de ella y para poder elegir, para tener opciones. La libertad cultural tiene que estar claramente reconocida, sancionada en este sistema, en este nuevo edificio, porque, como decía Heberl en un trabajo, hace tiempo, esa libertad cultural es el «aire en el que se desarrolla el pluralismo».

Vuelve sobre el contenido del artículo 149 de la Constitución: «y facilitará la comunicación entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas». El profesor Prieto echa en falta «acciones, medidas legislativas y, sobre todo, de política cultural, generales para la cultura y específicas para el Patrimonio apoyadas en este mandato constitucional. Yo creo que este apartado, esta frase, encierra la propuesta más abierta, integradora y democrática de la diversidad cultural presente en ningún texto cultural en el mundo. Así de rotundo lo digo, y sin embargo le hemos sacado muy poco jugo a ese precepto, ha quedado muy olvidado».

Finalmente, y apoyado en su última reflexión sobre la comunicación cultural, realiza su propuesta, destinada a hacer real la comunicación cultural transversal, «algo que no puede imponerse verticalmente»: para todas estas cosas que tienen mucha más envergadura, que no es sólo coordinar políticas y programas de actuación en el ámbito del Patrimonio. No sólo es ejercer funciones consultivas de carácter bastante técnico, sino para esto, que es una operación de gran calado cultural, filosófico-cultural, yo creo que nos faltaría un Consejo Superior de Cultura, ya no de Patrimonio, que ejerciera funciones sobre el Patrimonio que debiera estar integrado fundamentalmente, no por representantes políticos, no por funcionarios, sino por representantes del mundo del pensamiento, de la cultura, de la inteli-

gencia, para tratar de promover esa base, la base de ese encuentro, de esa comunicación, de ese diálogo.

Javier García Fernández: «Como moderador he procurado no hacer apostillas a las diversas intervenciones. Pero el profesor Prieto ha dicho algo que creo que las merece. El artículo 149.2, de la Constitución aparece en el texto constitucional a través de la llamada Enmienda La Cierva. Como el Sr. La Cierva luego ha derivado a posiciones bastante extremistas, se tiende a pensar que, en el fondo, también la enmienda es una expresión de extremismo. El artículo 149.2 es un texto tomado, casi literalmente, de la Constitución republicana de 1931, que son los que primero se preocuparon de coordinar la comunicación y evidentemente la autonomía de algunas regiones».

Prof. Prieto: «Efectivamente, ese texto tiene su trasunto casi literal en la Constitución de 1931 y si no recuerdo mal fue un texto en el que tuvo mucha intervención Miguel de Unamuno».

Colisiones entre el derecho sobre Patrimonio y el derecho urbanístico

Concepción Barrero, Universidad de Sevilla.

La profesora Concepción Barrero desarrolló su ponencia apoyada constantemente en ejemplos de la colisión de las legislaciones sobre Patrimonio y Urbanismo. Comenzó señalando que, si bien la Ley de Patrimonio exige que para el derribo de un edificio histórico en ruinas es preceptiva la autorización de la administración cultural de las Comunidades Autónomas, no aclara quién tiene la obligación de conservarlas en el caso de que la Consejería de Cultura no autorice su derribo. Sin embargo, el Tribunal Supremo mantiene que, una vez declarada la situación de ruina, el propietario ya no tiene obligación de atender a su conservación.

Las diferentes leyes autonómicas toman decisiones divergentes, mientras la Comunidad de Madrid o la Valenciana imponen el deber de conservación al propietario, otras no especifican nada. Por otra parte, ya sea a través de leyes de Patrimonio o del Suelo, algunas Comunidades Autónomas prohíben en cualquier caso que un edificio histórico en ruinas sea demolido.

Un caso, en su opinión, ilustrativo del grado de descoordinación al que se ha llegado, lo encuentra en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, cuando afirma que: «un conjunto histórico se tiene que ordenar, necesariamente, por una figura concreta de planeamiento de las

que existen en nuestro derecho como un plan especial». Sin embargo la Ley de Urbanismo de la misma Comunidad, dictada días después de la de Patrimonio, se dice: «que se puede utilizar un plan especial o un plan general».

La descoordinación sobre los requisitos legales para la tramitación de licencias, entre los criterios estatales, autonómicos y municipales a la hora de autorizar o no «la modificación del perfil de un conjunto histórico y la contradicción entre las leyes autonómicas sobre Patrimonio y del Suelo a la hora de permitir, o no, la elaboración de planes especiales de protección, previos a la existencia o no de un plan general, fueron otros tantos ejemplos propuestos a consideración por Concepción Barrero.

Este caos legislativo es la realidad en la que se producen los sucesivos desplazamientos de unas leyes por otras supuestamente de menor rango y lleva a la profesora Barrero a preguntarse si «realmente la Constitución de 1978 permite este resultado al que se ha llegado o si existen títulos competenciales para evitarlo. Tendríamos que discutir sobre ello, lo que permitiría, de alguna forma, reconducir la situación. Si es que creemos, como aquí parece que se ha expuesto por todos los que han participado, que la situación necesita de cierta reconducción». Como otros ponentes, manifestó la necesidad de reinterpretar las competencias que otorga el artículo 149.1.28.^a de la Constitución para lograr nuevas regulaciones, pero tan importante como esto le parece examinar las competencias que el Estado mantiene «realmente en materia del suelo y ordenación urbana».

Crónica de la evolución de las técnicas de restauración en el período democrático

Javier Rivera Blanco, Universidades de Valladolid y Alcalá de Henares.

[La exposición del profesor Rivera Blanco, apoyada con proyección de imágenes, fue una crónica sobre la evolución de las técnicas y los conocimientos sobre restauración desde la instauración de la democracia hasta el presente. El texto es una traslación editada de la intervención].

Creo que no se puede hablar en España, en los años del final de franquismo y primeros de la transición democrática, de ningún lugar o grupo de personas que tuviera una valoración cultural o social de la idea de conservación. Durante cuarenta años la posguerra fue

dura, como todos saben. Durante la autarquía, el Patrimonio era un lujo en el que no se debía gastar dinero. Pero, además, en los años del desarrollismo, después del plan de estabilización de 1957, también el Patrimonio se convierte en un sector secundario que no interesa ni a los políticos ni a la propia sociedad, que aspira a la modernidad, a los rascacielos, a la ciudad contemporánea. Y en muchas ocasiones, tenemos numerosas ciudades que lo demuestran, a costa del propio Patrimonio, destruyéndolo o sustituyéndolo. Y pongo un ejemplo de una ciudad culta como es Barcelona, que junto a su Diputación Provincial construyó un edificio gigantesco que ocupa su parte posterior, y que permitió a algunos autores hablar de la sodomización del arte y del Patrimonio.

Es cierto, sin embargo, que en las etapas anteriores [se refiere a la predemocracia] se produjo una valoración de la conservación del Patrimonio asentada en los criterios de muy pocas personas. Hubo programas valiosísimos, como aquellos de la recuperación de los Paradores Nacionales de Turismo, que permitió que muchos de estos edificios, unos en ruinas, otros infrautilizados, otros abandonados, pudieran convertirse en lugares de hostelería y de atracción para la inversión de bienes en el del turismo. Todos conocemos cómo se transformaron paradores como el de Sigüenza, como el de León, etcétera. Y traigo algunos de los ejemplos visualmente para que podamos apreciar que los criterios que se utilizaban eran más de carácter arquitectónico utilitario y, fundamentalmente, desde el punto de vista de la mimesis y de la reconstrucción en ambientes histórico. El caso de Sigüenza o el caso de León son ejemplares.

Los criterios de la restauración en los años finales del franquismo son llevados a cabo por los arquitectos famosos, personas de gran cualidad cultural, conocedores de la historia de la construcción, de verdadera vocación y dedicación a la conservación del Patrimonio, muchas veces incluso despreciados por sus propios compañeros que se dedicaban a la obra nueva, y que no entendían que ellos pudieran dedicarse a la conservar, sin medios, sin apoyo social, sin un contexto que arropara sus actuaciones.

Pero también es verdad que una persona indiscutible como Angelis Dossat llegó a escribir en una revista italiana que los criterios aplicados en esa época en España eran verdaderamente antiguos. Recordando algunas intervenciones traigo como ejemplo el Ayuntamiento de Tarazona, de Chueca Goitia, cuya segunda planta fue inventada despojando por completo de medallones y de arcos a otros edificios y monasterios cercanos, para dotarlo de un significado cultural. Se trataba, efectivamente, de un planteamiento de conservacionismo a la manera historicista. Antes incluso de la República existía una ley, que fue transformada en 1933 con Torres Balbás y que nunca se derogó, hasta el año 1985 en que se publicó la vigente pero que muy

pocas veces se aplicó respecto a sus criterios. Hubo algunas ocasiones, podemos recordar la actuación de Dionisio Hernández Gil en Extremadura o esta torre de Fernando Pulín en Salamanca, la torre de Abrantes, en la que se aplicaron los conocimientos y criterios más modernos entonces en Europa, sobre todo en Italia, como necesidad cultural de actualizarse o colocarse en la vanguardia de la conservación del Patrimonio.

Fernando Pulín, cuando recibe el encargo de Bellas Artes de reconstruir este torreón de Salamanca, lo hace de acuerdo a los criterios de la restauración crítica más avanzada italiana: al desconocer la altura real del torreón, los materiales, el tipo compositivo, lo hace en materiales contemporáneos y, efectivamente, es posteriormente destruida por orden de la propia Dirección General de Bellas Artes porque no responde a esos caracteres miméticos, historicistas, ¿doletianos? que caracterizaban el proceso.

Hubo un momento en la transición democrática en el que la propia sociedad que había demandado soluciones para un sistema de vida (compartir los conocimientos, compartir los derechos y los deberes), reclama el Patrimonio. Ese Patrimonio que había estado en gran medida abandonado e infrautilizado y que ocupa todo el territorio español en multitud de edificios: monasterios, conventos, palacios. La propia sociedad demanda esa recuperación a ejemplo de lo que ocurre entonces en Italia, Francia o Inglaterra. Se va a iniciar un proceso de inversión en esa intervención en el Patrimonio que ha llegado hasta nuestros días. Los datos del año pasado pueden ser significativos, en el que en España, de cada 100 euros, se dedican ya 33 ó 34 a la conservación y recuperación del Patrimonio en los centros históricos. Pero aún estamos lejos de los 60, 55, 66 que se invierten en países como Italia, Francia, Suecia y Holanda. Aún nos falta tiempo y nos falta especialización.

El problema de la especialización fue marcadamente significativo en la transición democrática. La llegada a los órganos culturales de la UCD primero, y del PSOE después, renueva toda la organización de Bellas Artes, altera y cambia las capas directivas, se abandonan los criterios miméticos e historicistas de la etapa anterior y, a partir de la propia Constitución, aparecen nuevos personajes como Dionisio Hernández Gil, como Antón Capitel, que suceden a los antiguos e introducen rápidamente los criterios de la restauración crítica italiana. Pero es un momento complicado, muy complejo. En España hay muy pocos profesionales preparados por razón de que los arquitectos deseaban antes la obra nueva que la obra histórica a la que consideraban marginal.

Es un momento en el que no hay una tradición restauradora en la modernidad y es un momento, también, en el que está naciendo el Estado de las Autonomías. Con 17 regiones y naciones que van a

comprometer unas necesidades de equipamientos y de inversiones en ese Patrimonio que necesita esa nueva sociedad. Se publicó, en 1975, la Carta de Ámsterdam o de Europa, que va a provocar también imprevistas influencias en el sector laboral. Paralelamente tenemos la primera gran crisis del petróleo que afecta, sobre todo en los años ochenta a la profesión de la Arquitectura, como a otras. Y, en cambio, se demanda socialmente la intervención en el Patrimonio. Las nuevas autoridades de Bellas Artes, antes de la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas, reforman el sistema de adjudicación de obras, introducen los criterios de la restauración de vanguardia y, rápidamente, se pasa de aquellos 37 arquitectos que se dedicaban a la restauración en la etapa franquista en 10 años a más de 3.000. Claro, esos 3.000 algunos son arquitectos famosos: Sáenz de Oiza, Fernández Alba, Alejandro de la Sota, que llegan con unos conocimientos profundos y amplios, pero no específicos en la restauración y otros muchos jóvenes arquitectos no preparados, que rápidamente intentan formarse en el ámbito italiano. A la vez, otros arquitectos como José María Pérez, *Peridis*, plantean la creación de las escuelas-taller con una vertiente para la recuperación de los oficios perdidos. Lo que sobraban en España eran ferrallistas, no había canteros y eran pocos los albañiles especializados en este material.

Se produce entonces una renovación radical, importantísima. Una necesidad de edificios, de recuperaciones e intervenciones y un proceso de adquisición de criterios que se hace a través de *masters*, de cursos, de especialistas invitados, italianos, europeos en general. Porque dada nuestra escasez de arquitectos, salvo durante un breve período la Facultad de Madrid, nadie forma a nuestros profesionales, como tampoco Bellas Artes tampoco forma a los historiadores o a los restauradores en la conservación del Patrimonio.

El ejemplo de Aguilar de Campoo es significativo. Se pasa de aquella forma de actuar de Chueca Goitia mimética, reconstructiva, inventadora de plantas de un edificio, un edificio completamente arruinado, expoliado por el Estado y por las propias administraciones para que no sea saqueado por los vecinos, a una recuperación gradual a través de esas escuelas-taller.

Las escuelas-taller tienen problemas —que no vamos a abordar ahora— en cuanto a la composición de los miembros de las mismas, jóvenes muchas veces marginales, la dependencia política de los Ayuntamientos, pero fueron un revulsivo de concienciación general y social sobre la trascendencia del Patrimonio. En estas intervenciones vemos que José María Pérez, *Peridis*, inventa donde hay ausencias, donde hay lagunas, deja la marca y el registro de la actuación contemporánea. Vemos que introduce los nuevos materiales, introduce los nuevos conceptos espaciales, respetando y conservando las características del edificio y puede haber algunos detalles manieristas crítica-

bles, sin ninguna duda, como la de dejar esas cubiertas visibles, más por razones pedagógicas que por otro motivo, pero que muestran un poco el cambio radical que se transforma en aquellos años.

Otro gran maestro, Dionisio Hernández Gil, que se ha formado en Italia, que tenía una verdadera formación en el mundo de la restauración. Con una dedicación absoluta muestra también su maestría a través de la restauración de diferentes obras. Yo traigo aquí el templo de Diana en Mérida, en el que el estado del edificio absolutamente deteriorado, con restos de un palacio renacentista en su interior, con fragmentos desaparecidos plantea la dificultad de su reutilización contemporánea. Y aquí vamos a ver por primera vez que hay una intervención rigurosamente científica, en el sentido del conocimiento profundo y exhaustivo del monumento: excavación, levantamientos de todos los elementos del edificio, análisis cuantitativo de los restos de las distintas épocas y conservación. De manera que se salva el palacio de los Corvos del XVI y se restituyen escasas piezas que han aparecido en el suelo, que por medio de la anastilosis se elevan a su estado auténtico en el edificio, marcando perfectamente lo antiguo y lo nuevo, lo original y lo contemporáneo. Una lección en aquel momento en el mundo de la restauración, aunque todavía depende fuertemente de las aportaciones y las enseñanzas de la etapa precedente.

Desde ese momento empiezan los, vamos a llamarles, filósofos de la historia contemporánea del pensamiento a hacer sus aportaciones y, aunque no son muchos, porque en España tenemos la desgracia, y esto es casi una denuncia, de que los arquitectos pocas veces dejan escritas sus reflexiones, no hacen esfuerzos grandes para publicar las memorias de sus restauraciones, ni los métodos a los que han llegado. Pero sí, hay excepciones notabilísimas y en el comienzo de los años ochenta surge un debate profundo verdaderamente interesante con algunas personalidades de marcado prestigio. Unas jóvenes, otras ya maduras en aquel momento. En la Escuela de Madrid aparece Antón Capitel planteando su metodología analógica en la reconstrucción que va a aplicar en Ntra. Sra. de Montserrat, que vemos en la pantalla. Reconstruye el presbiterio imitando por analogía no por historicismo, igual que cierra el muro del presbiterio y el paredón con esos mecanismos para sustituir aquella obra inacabada del siglo XVII cuando les faltó a los jesuitas dinero. Se trataba también de una operación distinta, nueva, que él va a defender en su documentación.

A partir de ese proyecto de Antón Capitel, que expresa en su *Historia de metamorfosis de los monumentos*, un libro muy leído en aquel momento, van a surgir otros núcleos importantes en Cataluña, que vamos a ver rápidamente.

Pero antes quería hablar del impacto que suponen las transferencias a las Comunidades Autónomas y el desarrollo de las autonomías propiamente dichas. Diecisiete en todo el país, en toda la nación, necesi-

tan urgentemente equipamientos, identidad histórica, necesitan transmitir desde el pasado al presente esa legitimidad de sus orígenes, esos derechos históricos que algunos reclaman, unos con razón y otros... o todos con ella, y traigo pocos ejemplos para que se vea que hubo un período escasamente reflexivo en la intervención en los monumentos, en la adecuación, en los nuevos usos, de manera que sufrieron gravísimas transformaciones, a veces violencias irreversibles provocadas por su utilización para nuevas funciones, sin tener la más mínima compatibilidad para ellas. Y traigo un ejemplo de mi tierra para no ofender a otros, aunque luego pondré de otras. Es el caso del castillo de Fuen-saldaña. ¡Cómo Castilla y León, con ese nombre, no iba a tener su Parlamento en un castillo! Y se elige un castillo que no cumple las más mínimas normativas, ni de higiene ni de seguridad de ninguna clase, para destruir una restauración mimética que acababa de hacer un arquitecto, Ángel Ríos, reinventando un patio renacentista, perdón, medieval y todo ello con mucha inteligencia. Los arquitectos modernos, sin alterar la silueta, sin alterar el perfil, pero teniendo que sufrir esos condicionantes de la legislación, de la normativa, instauran en su interior un hemicycle que provocan la destrucción de aquella restauración mimética y que crean un espacio funcional absolutamente incapaz en un edificio que no puede, de ninguna manera, estirarse para cumplirlas. Ello ha provocado que en este momento se esté acabando un nuevo Parlamento, con lo cual habrá que hacer otra nueva rehabilitación en el edificio y podríamos ir sumando los miles de millones de euros que supone ese tipo de actuaciones irreflexivas.

El mismo fenómeno se produjo en toda la península, en todas las Comunidades. Traigo el ejemplo de la Aljafería, hecho con más habilidad, con más inteligencia desde los principios, precisamente, de la analogía formal en la que los nuevos edificios fueron capaces de hablar y de comunicar con los históricos sin afectarlos, manteniendo sus capacidades esenciales y aportando la vanguardia y la modernidad sin tener que alterar y transformar lo antiguo.

Otros sufrieron, como es el caso de la Comunidad de Cantabria, en el que también hubo que sacrificar parte del hospital del siglo XVIII para introducir un edificio, cerrar sus cubiertas y poderlo hacer compatible con los nuevos usos. Otras fueron más prudentes, como la de La Rioja, y así la lista sería interminable por toda la península.

Les comentaba que en Madrid había surgido un pensador, Antón Capitel, que reflejó en publicaciones sus opiniones. En Cataluña va a estar la otra punta de lanza, quizás mucho más incisiva, de mucha más importancia desde mi punto de vista, por la trascendencia europea. Va a estar encabezada por dos vertientes diferentes, una por el desaparecido y querido Ignaci Solá Morales, que publica un artículo muy importante en aquellos años en la revista *Lotus*: «Constrato a la analogía», que luego se reedita en España en varias ocasiones. Lo

presenta en un Congreso en Santiago de Compostela, y va a provocar que la restauración en España se actualice en los términos italianos de esos momentos. La otra postura, de la que luego nos ocuparemos, surge del Servicio de Patrimonio de la Diputación de Barcelona con la personalidad de Antón González Capitel. Traigo alguna muestra de Ignaci Solá Morales en la intervención en el palacio Llimona o palacio Güelves en el barrio Gótico de la ciudad catalana para que veamos cómo restos y fragmentos de la historia pueden ser actualizados sin perder los rasgos históricos y compartiendo ese lenguaje, ese debate entre la antigüedad y la modernidad, respetando la historia y el presente sin que haya distinción ni confusión en contrapartida a lo que había ocurrido en la etapa anterior.

Desde el punto de vista institucional, en España se están produciendo también importantes aportaciones. El antiguo ICROA (Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte), que fuera fundado ya décadas antes, se rehabilita y se instala en una nueva personalidad y en una nueva concienciación de servicio, gestión y dedicación a la conservación del Patrimonio. En el caso del Instituto del Patrimonio, y Ramón de la Mata es uno de sus líderes fundamentales, se crea un modelo de gestión y de dedicación que lo conforman profesionales de extraordinaria calidad muy mal pagados (hay que decirlo), y con el que yo me he metido no pocas veces porque debe de ser el instituto Instituto Histórico de Restauración Español o el... y quizás por culpa de las autonomías se le han cortado un poco las alas y no ha tenido el apoyo oficial o estatal que hubiera debido tener o ha tenido en otros países el Instituto Central de Restauración. Aun así, su labor es extraordinaria, como todos saben, con sus aportaciones, sus restauraciones en Santillana, en Madrigal y, fundamentalmente, con sus servicios técnicos, sus publicaciones (traigo la muestra del arte de la Cal de Gárate o la revista que todos conocemos ahora de BC, que ya lleva 5 ó 6 números) y que, con una gran colección de publicaciones, es un abandonado en este servicio, aunque a él todavía le seguimos demandando más y deseamos que domine a nivel internacional el extraordinario valor que tienen sus profesionales.

En Andalucía hace once años se funda el Instituto del Patrimonio Andaluz que es un germen de conocimiento, clasificación, evaluación, análisis y de creación de criterios en la restauración. Desde el punto de vista de las regiones no creo que exista en Europa un instituto de esa calidad y lo defendemos y casi lo ensalzamos en el máximo sentido. Ahí está la revista *Patrimonio Histórico* n.º 53 ó 54, y toda su colección de publicaciones, que hacen una verdadera aportación doctrinal a la idea de la conservación y de la restauración en España. En ese sentido es un momento bastante importante.

Y desde el punto de vista institucional privado, podría leerles una serie de datos que tengo ahí: estamos a un cuarto de lo que se invier-

te en el mundo privado en España con respecto a Italia o Francia. Las dedicaciones y la conformidad de nuestra sociedad civil está muy lejos de comprender y estar concienciada de las necesidades de nuestro Patrimonio, y hay, en cambio, organizaciones ya de carácter fundamental como la Fundación Caja Madrid, como la Fundación del Patrimonio de Castilla y León, la Fundación Santa María, la Fundación Albarracín, los amigos del Serrablo; en fin, una serie de instituciones verdaderamente importantes, que hay que apoyar, amparar, multiplicar y proteger.

Como ejemplo de una de esas restauraciones, traigo el acueducto de Segovia, no tanto como ejemplo de los criterios de restauración sino del análisis y conocimiento del monumento ya que desde el Ministerio de Cultura, desde la Junta de Castilla León y desde la Fundación se ha permitido que sea uno de los edificios, mejor estudiados que hay en España, con un conocimiento exhaustivo de todos sus elementos aunque el plan director, como he manifestado en alguna ocasión, tuvo un fallo garrafal y es que no tuvo un análisis arqueológico conveniente que hubiera permitido saber de qué época es el Acueducto, que aún no lo sabemos, pero es una muestra clarísima de un modelo nuevo de investigación que se va introduciendo en España en nuestras instituciones como es ese conocimiento profundo exhaustivo, esos estudios previos que la metodología moderna exige antes de redactar el proyecto definitivo. La introducción de todas las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos al estudio del Patrimonio son los que permiten realmente que lleguemos a redactar ese proyecto perfecto, definido que puede permitir el avance en su conservación.

Me refiero ahora al tercer pensador Antoni González Moreno y Navarro, que desde el Servicio de Patrimonio de la Diputación de Barcelona (SPAL) es capaz de crear un proyecto personal, lo que él llama la restauración objetiva, o método SCCM del Servei de Catalogación de Monumentos y que nos ofrece una alternativa a la restauración crítica italiana, entendida desde las condiciones individuales del Patrimonio español y más específicamente, del barcelonés. Sus aportaciones son expresadas en publicaciones y en congresos, discutidas, debatidas y nos proponen una verdadera solución, nueva en cuanto a las posturas que entonces se imponían en España y que es paralela a las que están en ese momento realizándose en Italia con Paolo Marconi, Andrea Bruno, y con los más avanzados restauradores italianos. En aquel momento realiza alguna restauración según la restauración objetiva, que él explica muy bien que no es objetiva porque la restauración siempre es subjetiva, porque el objeto se puede resignificar, se puede transformar y reofrecer a la comunidad contemporánea, y algunas de sus intervenciones, como San Viçent de Maia, son muy debatidas en aquel momento.

San Jaume de los Oliveros es toda una colección pedagógica que nos muestra cómo se deben estudiar previamente los monumentos y cómo se puede hacer el proyecto. Digamos que la habilidad del método SCCM está en la composición de los equipos que analizan y estudian esos edificios o esas obras a restaurar. Es el procedimiento que desarrolla también el Instituto del Patrimonio y el Instituto Andaluz: la pluridisciplinariedad real. Cada proyecto no es el resultado final de un objetivo que se busca, sino el crisol, el final de los conocimientos recabados por todos los especialistas y todos los agentes con competencias en Patrimonio: historiadores, arqueólogos, químicos, físicos, aparejadores, son los que ofrecen al arquitecto la documentación y el conocimiento exhaustivo para llegar a ese resultado final que se plasma en el proyecto.

La obra más discutida de Antonio González fue la famosa cripta de la colonia Güell, tan discutida, tan debatida, que ha provocado esas pasiones que es lógico que provoque Gaudí siempre, y todo lo que haya a su alrededor. Pero desde el punto de vista metodológico es inexpugnable, dado que el equipo de la Diputación de Barcelona tuvo, como siempre, el proceso de conocimiento profesional de que era lo que había hecho realmente Gaudí, que habían hecho los maestros que quedaron después cuando él se marchó, buscando fotografías día a día, hora a hora, mes a mes. Viendo lo que había hecho Nonell, el párroco, todo eso que después se ha defendido con una pasión yo creo que no acertada, dado que no se ha distinguido qué era precisamente lo que había hecho Gaudí, que es lo que ha protegido y mantenido Antoni González, y qué era lo auténticamente original o qué pertenecía a otras personas. Ya no hablo de la calefacción, no hablo de pavimentos, etc. Son algunas muestras de las fotografías anteriores, de los planos actuales y de la obra recién concluida que nos muestran una resignificación del monumento y un replanteamiento de la situación que ha planteado y ha permitido a la UNESCO reconocer en esta restauración una obra maestra y declarada Patrimonio de la Humanidad.

La metodología plantea uno de los problemas más graves todavía en España. Gracias a estos Institutos que acabo de mencionar, a los centros modernos que lentamente se van creando, se ha podido detener actuaciones que podrían ser peligrosas para el Patrimonio. El caso de La Cuba de Granada, el cuarto real de Santo Domingo, que conserva un magnífico jardín del siglo XIX, que conserva un palacete, que no es maravilloso pero es original, contextual, que conserva la cuba musulmana, pero que los datos arquitectónicos no han sido elocuentes, más bien al contrario, al igual que los datos históricos, pero que han permitido ese celo, esa vigilancia, esa trascendencia de los valores de los estudios previos para conservar estos edificios antes de su restauración.

Cuando se produce la transferencia de las competencias, 17 Comunidades Autónomas crean sus Direcciones Generales, sus nuevos servicios; en algunos momentos la Dirección General de Bellas Artes y las Comunidades Autónomas tienen difíciles relaciones de entendimiento, cuando debería convertirse la Ley de Patrimonio en la doctrina fundamental del país, cada comunidad va por un camino, ejerce distintos criterios. Al mismo tiempo estamos ante aquella problemática de muchos jóvenes arquitectos que entran en la restauración sin formación, sin conocimiento en un momento en el que la sociedad demanda urgentemente rehabilitar, en un momento en el que hay medios para hacerlo.

El problema de la formación es urgente y entonces se impone un criterio de la Dirección General de Bellas Artes (se lo oí a Dionisio Hernández muchas veces), que yo no comparto: Y es el de que cualquier arquitecto, o un buen arquitecto, puede restaurar una obra del pasado. Yo defiendo, en cambio, cierta especificidad en la formación, el conocimiento especializado, dado que un arquitecto generalista puede hacer un aeropuerto y un hospital y unas viviendas, pero necesita un conocimiento especial del Patrimonio, por muchas razones, entre otras porque le va a engañar la empresa, le va a engañar el laboratorio, los historiadores, los arqueólogos, y porque necesita una comprensión de lo preexistente para saber qué debe conservar y qué puede aportar.

Ejemplos de aquellos años de la transición tenemos muchos. He seleccionado algunos positivos y algunos negativos según mi punto de vista. De Salvador Pérez Arroyo traigo sus intervenciones a través de medios financieros en una diputación en el Monasterio de Carracedo en el que se hacen nuevas cubiertas y protecciones de las lagunas, sin reconstruirlas, ni recrearlas, con escaleras, nuevas cubiertas donde se aplican un poco las teorías de Boito en el sentido que la superposición de nuevos materiales no afecten a los históricos ni los transformen radicalmente. Hay restauraciones muy malas y a mi admirado Manuel de las Casas, que fue una persona muy importante en la Dirección General de Bellas Artes, que ha dirigido las obras más trascendentes, también se le ha escapado algún caso muy grave y traigo este caso de mi tierra: el palacio de Benavente, que tenía sus torres y sus patios renacentistas. La verdad es que se había incendiado varias veces. Había sido manicomio, hospicio, prisión. Y sufrió unas transformaciones que no se explican muy bien, mutilando su silueta, sus torres, alterando sus huecos, sus colores. Volvemos otra vez al tema de la incompatibilidad de los nuevos usos con los antiguos. El propio Manuel de las Casas ha reconocido después que fue una actuación que hoy no haría y que en su momento la hizo de esa manera sin quizás las prevenciones necesarias.

En aquel momento de la restauración analógica, unos profesores como Manuel de las Casas, Vázquez Consuegra, etcétera, intervienen en algunos edificios significativos como la iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco, y nos descubren, nos introducen en todos aquellos principios de la restauración boitiana: distinción de los nuevos materiales respecto a los antiguos, búsqueda de equilibrios entre las nuevas formas y las históricas, y la no renuncia, nunca, a la contemporaneidad. Lo vemos en el proyecto de reconstrucción de la bóveda que se había hundido y en el lateral izquierdo, donde hubo un primer proyecto que era mimético con respecto a lo que había existido y que luego se transformó en un proyecto moderno. Aquí vemos el que habría sido el mimético, antes de la transformación y ésta es la conclusión. Los materiales, entonces están de moda las maderas laminadas, que se introducen en España por la influencia francesa, las resinas. La influencia del contraste que defendía Ignaci Solá en Cataluña es manifiesta en algunas intervenciones como las que hacen Tusquets, Clotet y sus equipos en el Palau de la Música donde, con total prudencia, se restaura la parte de Domenech i Montaner y donde se añaden, por contraste, por contemporaneidad absoluta, los nuevos edificios en ese debate o en esa dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo. Esta obra de Casas, que yo creo muchísimo más atinada, nos muestra esa prudencia, ese conocimiento del monumento en La Granja de San Ildefonso, en la Fábrica de Vidrio, que ha permitido una recuperación del edificio, de la maquinaria, de los espacios, sin alterar sus recorridos, mostrando sus significaciones y sus valores históricos y también sin renunciar a la introducción de la arquitectura contemporánea, con sus nuevas visiones.

Obras bien hechas, otras desde el punto de vista de la reversibilidad, las encontramos en el Museo de Historia de Tarazona, cuyos espacios difíciles, complejos, pueden ser fragmentados en ordenaciones verticales y horizontales para permitir esa nueva actuación.

El caso de Sagunto es conocido de todos y no me voy a extender. Nunca quiso ser una restauración para Portacelli y Grassi (que efectivamente contaron con todos los parabienes de la Administración de aquel momento), pero fue un error gravísimo por la pérdida que supone de un hecho histórico, un hecho realmente que pertenece al Patrimonio colectivo, por la actuación de un modelo contemporáneo que podía haberse realizado en las proximidades o en cualquier otro lugar, sin afectar de esta forma tan dramática al espacio histórico. La intervención se hizo, además, con errores metodológicos y arqueológicos. Una vez casi concluido, por supuesto, hecha ya la maqueta y aprobada, se hacen excavaciones arqueológicas en las que aparecen estos capiteles, estos tambores que son los que se van a incorporar después de una forma extraña a escena y que hubieran determinado algunos aspectos del proyecto. La reversibilidad, por supuesto, es

prácticamente imposible y la declaración del Tribunal Supremo no lo recomienda, en el sentido de que el edificio sufriría ahora una transformación, una alteración desgraciada, como podemos ver por la compactación de los antiguos con los nuevos materiales.

Esas restauraciones analógicas llegaron a un extremo radical. Traigo el ejemplo de las murallas de Alcalá de Henares, en las que se reconstruyeron muchos de sus lienzos o la intervención en Baeza en la que el protagonismo del hormigón y de las nuevas piezas contemporáneas se ha apoderado y homogeneizado sobre las precedentes históricas, invadiéndolas y despojándolas de todo su significado.

Quería concluir señalando que a lo largo de estos treinta años hemos tenido altibajos, momentos difíciles, complejos. Hubo un momento crudo en el que la analogía se convirtió en método imperante, muchas veces sin la utilización de estudios previos. Las legislaciones mismas no hacen hincapié en que las restauraciones no estén financiadas por el arquitecto sino por la Administración. El arquitecto, cuando tiene escasos fondos, no puede atenerse a esas investigaciones previas; con lo cual no lo hace. Y la Administración en otros casos exige lo que yo llamo la dictadura de los laboratorios y la empresa, en determinados casos emblemáticos muchos estudios previos administrativos. Por ejemplo en el caso del acueducto de Segovia que no se hizo un estudio arqueológico previo se gastaron 600 millones en estudios previos de todo tipo que muchos casos eran absolutamente innecesarios.

En los últimos cinco o diez años la restauración ha sufrido no una involución, como los algunos partidarios de la restauración analógica defienden, sino que atraviesa un período de mayor reflexión o sensibilidad en el sentido de que el conocimiento, la exhaustividad de los análisis previos se han desarrollado a través de diversos programas. En ese sentido, estamos avanzando hacia el contexto europeo. Pero nos queda mucho camino por andar. Modificar la Ley de Patrimonio, cuestión que está en estudio, quizás no sea lo más indicado dada la situación administrativa que se va a producir en los próximos meses. Pero creo que el artículo 39 no es muy eficiente en la claridad de sus ideas. Probablemente el documento que surgió del consenso de aquellos años sea el más impoluto que se pudo hacer en aquel instante, pero abogaría por la elaboración de reglamentos, al estilo de algunos europeos, que crearan una suerte de casuística que orientara a los profesionales de la restauración en los caminos a seguir. En la esperanza de la investigación y del conocimiento está la esperanza de la conservación de nuestro Patrimonio.

Nuevos patrimonios

Víctor Pérez Escolano, Escuela de Arquitectura de Sevilla.

La incorporación del movimiento moderno

La definición del concepto de nuevos patrimonios le planteó al profesor Víctor Pérez Escolano algunas dudas metodológicas. En primer lugar, ¿de dónde procede la novedad? ¿De la existencia material de nuevos patrimonios, o del propio Patrimonio considerado como hecho cultural? Y sobre todo, ¿podremos considerar como bienes patrimoniales todos esos nuevos conceptos? La respuesta fue considerar la historicidad del concepto de Patrimonio, por tanto su relatividad. De tal manera que seamos conscientes de que esos nuevos bienes patrimoniales nacen en la contingencia de nuestra realidad biográfica, y pueden estar sujetos a caducidad.

Estas consideraciones le llevan a «testar modestamente la existencia de unos Patrimonios emergentes», que anteriormente nadie hubiera considerado como tales. Para ello es necesaria la utilización de «nuevos parámetros no sólo cronológicos» sino también geográficos, culturales e incluso profesionales. Se plantea la necesidad de incorporar cosas que en otras épocas, por intangibles, hubieran sido consideradas «no convenientes».

Por otra parte, esto produce también una nueva relación entre disciplinas, como en el caso de la arquitectura y la arqueología: lo que antes era considerado arqueología industrial, ahora forma parte también del patrimonio arquitectónico, e incluso, gana una nueva dimensión si se considera dentro «de un patrimonio de la cultura del trabajo». Una cultura del trabajo industrial, urbano, proletario, «que hoy sabemos que debemos integrar en el Patrimonio».

Esta nueva consideración del concepto de Patrimonio permite no sólo que se abra «a la complejidad de los fenómenos socio culturales, sino a una nueva comprensión del Patrimonio en el contexto territorial». En esta nueva dimensión, nada es posible sin una transversalidad entre las legislaciones sobre Patrimonio y urbanismo.

Esto es una novedad absoluta, hasta el punto de que cambió la exigencia sobre la antigüedad de los edificios: «hasta hace no demasiado tiempo algo que no tuviera más de cien años, o un edificio cuyo autor estuviera vivo, no podía ser considerado patrimonio».

El punto de inflexión histórico sobre estas cuestiones se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y, particularmente, «en los años sesenta». El historiador de la arquitectura Nicolaus Pevsner en

su libro *Pioneros del mundo moderno* pone, en vísperas de la guerra, las primeras ideas sobre la contemporaneidad del patrimonio en un país tan conservador como el Reino Unido. Sin embargo las instituciones inglesas integraron con gran naturalidad sus propuestas, sobre las 50 obras contemporáneas del movimiento moderno británico de los años veinte, treinta y cuarenta.

En el año 1985 la XXIII Conferencia de la UNESCO realizó una campaña en pro de la arquitectura *art nouveau*, al mismo tiempo que la Convención sobre Patrimonio Andaluz, en Granada, admitía la extensión expresa a toda la arquitectura del siglo xx. Es decir, entre los años sesenta y ochenta, en plena posmodernidad ideológica, se produce el reconocimiento definitivo del movimiento moderno. Como consecuencia se crea el DOCOMOMO Internacional [Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement] en la Escuela de Arquitectura de Holanda. Una realidad que se extiende por todo el mundo en los ámbitos universitarios. Esta experiencia en España adquiere una peculiaridad especial al pilotarla la Fundación barcelonesa Mies van der Rhoe, en la que participan distintas instituciones, desde la Generalitat hasta el gobierno central, y algunos colegios de arquitectos españoles y portugueses. Nace, por tanto, como el DOCOMOMO Ibérico, al que posteriormente se adhiere el Instituto Andaluz del Patrimonio, logrando de esta forma una institución transversal, hecho que llama la atención de DOCOMOMO Internacional, por las variadas formas de actuación y financiación a las que puede recurrir. Se produce, en opinión de Pérez Escolano «una corporeidad de reflexión, de disciplina que se traduce en la estimación de valores patrimoniales, sometida a lo que podríamos llamar la asimetría o disimetría del sistema jurídico-administrativo del Estado de las Autonomías. Y lo digo no en términos peyorativos, sino que, como es natural, los esfuerzos para alcanzar homogéneos o similares resultados tienen que ser plurales, pero considero que en este momento histórico lo que hace falta no es recelar del Estado de Autonomías, sino potenciar la naturaleza de los proyectos comunes españoles. Mi posición no es «esto está mal porque esas disimetrías demuestran que el sistema no es bueno». No, el sistema es bueno porque ha mejorado extraordinariamente muchas cosas. Pero tiene que seguir existiendo, además de esfuerzos competenciales en territorios distintos, una constatación en políticas concretas de proyectos comunes españoles, como pueda ser el del Patrimonio español del siglo xx. Es decir que el Ministerio tiene la competencia de la reflexión en común para toda España para determinadas materias».

Pérez Escolano concluyó celebrando la reciente incorporación del núcleo central de la ciudad de El Havre al Patrimonio de la Humanidad [El Havre fue reconstruida por Auguste Perret después de su des-

trucción parcial en la Segunda Guerra Mundial], por cuanto significa tanto el aprecio por el pasado, cuanto por el esfuerzo y las aportaciones de la arquitectura contemporánea: «Luchemos contra las destrucciones sin sentido, pero que eso no signifique no abrir claramente nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia respecto a las intervenciones contemporáneas».